

DELITO: Apremios ilegítimos

RUC 1810036199-6

RIT 52-2023.-

ACUSADO: SEBASTIÁN ANDRÉS QUIROZ GONZÁLEZ

Viña del Mar, seis de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Que, con fecha uno de junio de dos mil veintitrés, ante esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, integrada por la juez presidente de sala doña **Claudia Ortiz Leiva**, y por los jueces doña **Marcela Nash Álvarez** y don **Fernán Rioseco Pinochet**, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral **RUC1810036199-6, RIT 52-2023**, seguida en contra de **SEBASTIÁN ANDRÉS QUIROZ GONZÁLEZ**, cédula nacional de identidad N° 16.615.718-8, nacido el 26 de abril de 1987 en la ciudad de Santiago, 36 años, casado, cabo 1° de Carabineros de Chile, domiciliado en calle Lago Ontario N° 8013, Lo Prado, Región Metropolitana de Santiago.

Sostuvieron la acusación los fiscales adjuntos don **Alfredo Keller Quital** y don **Cristián Cuevas Villegas**, mientras que la parte querellante estuvo representada por las abogadas del Instituto Nacional de Derechos Humanos doña **Javiera Tapia Pérez** y doña **Javiera Albarrán Hola**. Por su parte, la defensa fue asumida por el defensor penal privado don **Cristián Berthet Ortiz**, todos con domicilio y forma de notificación ya registrados en el Tribunal.

SEGUNDO: Acusación fiscal y particular. Que los hechos materia de la acusación, según se lee en el auto de apertura, son los siguientes:

“El 21 de mayo de 2018, el adolescente Patricio Antonio Alvarado Meza, nacido el 24 de diciembre de 2002, de 14 años de edad al momento de los hechos, alrededor de las 16:30 horas aproximadamente, se encontraba en la Plaza Arturo Prat de la comuna de Quilpué, junto a unos amigos, todos también menores de edad. En este contexto fueron objeto de un control de identidad por parte de personal policial, siendo detenida la víctima por el delito previsto y sancionado en el artículo 288 bis del Código Penal y



trasladado a la 2ª Comisaría de Carabineros de Quilpué, dónde quedó a cargo del acusado, el cabo 1º Sebastián Andrés Quiroz González”.

Encontrándose en el interior de la comisaría, la víctima solicitó ir al baño de los calabozos, lugar dónde el acusado lo agredió con golpes de pies y puños en la cabeza y distintas partes del cuerpo.

Producto de lo anterior, la víctima resultó con lesiones consistentes en “contusión nasal, aumento parietal izquierdo, equimosis en región interna del muslo izquierdo, eritemas lineales en ambas muñecas, sangramiento de nariz y boca”, de carácter leve” (sic).

Los hechos antes descritos, a juicio del Ministerio Público, configurarían el delito de **apremios ilegítimos**, tipificado en el artículo 151 D del Código Penal, en grado de desarrollo consumado y en el que le cabría al acusado responsabilidad penal en calidad de autor, conforme con lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, concurriendo la atenuante prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Punitivo, sin agravantes.

El Ministerio Público solicitó se imponga al acusado la pena de **cuatro años de presidio menor en su grado máximo**, accesoria del artículo 30 (sic) del mismo cuerpo legal, y el pago de las costas de la causa.

A su turno, la querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos dedujo acusación particular por los siguientes hechos:

“El 21 de mayo de 2018, el adolescente Patricio Antonio Alvarado Meza, nacido el 24 de diciembre de 2002, de 14 años de edad al momento de los hechos, alrededor de las 16:30 horas aproximadamente, se encontraba en la Plaza Arturo Prat de la comuna de Quilpué, junto a unos amigos, todos también menores de edad. En este contexto fueron objeto de un control de identidad por parte de personal policial, siendo detenida la víctima por el delito previsto y sancionado en el artículo 288 bis del Código Penal y trasladado a la 2a Comisaría de Carabineros de Quilpué, dónde quedó a cargo del acusado, el Cabo 1º Sebastián Andrés Quiroz González.

Encontrándose en el interior de la comisaría, la víctima solicitó ir al baño de los calabozos, lugar dónde el acusado lo agredió con golpes de pies y puños en la cabeza y distintas partes del cuerpo.

Producto de lo anterior, la víctima resultó con lesiones consistentes en “contusión nasal, aumento parietal izquierdo, equimosis en región interna del



muslo izquierdo, eritemas lineales en ambas muñecas, sangramiento de nariz y boca”, de carácter leve” (sic).

Según el acusador particular, los hechos descritos constituyen el delito de **apremios ilegítimos**, previsto y sancionado en el 150 D del Código Penal, en grado de ejecución consumado, y en el cual el imputado Sebastián Andrés Quiroz González habría participado en calidad de autor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Agregó el acusador que, junto con reconocer la atenuante de irreprochable conducta anterior, concurre la agravante específica contemplada en el inciso 2° del artículo 150 D del Código Penal, toda vez que la persona afectada era menor de edad y se encontraba bajo custodia estatal; además de la agravante genérica consagrada en el artículo 12 N° 6 del Código Penal, esto es, el abuso por parte del delincuente de la superioridad de sus fuerzas, en términos que la víctima no ha podido defenderse con probabilidades de repeler la ofensa.

Luego de las citas legales, el INDH pidió que se imponga al acusado Sebastián Andrés Quiroz González la pena de **cinco años de presidio mayor en su grado máximo** y accesoria del artículo 30 (sic) del Código Penal, por su responsabilidad como autor del delito consumado de apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 150 D del Código Penal, con expresa condena en costas.

TERCERO: *Alegatos del Ministerio Público.* Que el Ministerio Público, en su **alegato de apertura** expuso que los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2018 en la plaza de Quilpué. Carabineros detuvo a la víctima, de entonces 15 años, y lo trasladaron a las dependencias de la 2da. Comisaría de Carabineros Quilpué, aprovechando el acusado que el menor fue al baño para golpearlo y causarle lesiones. El bien jurídico protegido por el tipo penal es la integridad moral, que se verá reforzado con el Protocolo de Estambul y la Convención sobre los Derechos del Niño. El imputado estaba a cargo de la guardia de la unidad policial en el momento.

De estos hechos había grabaciones, pero el momento exacto en que la agresión se captó fue borrado. Ese hecho fue observado por uno de los testigos que salió de su oficina y desapareció la grabación.

Se alegará por la defensa que debió emplearse una fuerza racional y prudente para contener al ofendido, y probablemente, la existencia de ganancia secundaria con la denuncia, la que descarta pues los hechos ocurrieron antes del llamado “estallido social”.



Pronostica veredicto condenatorio.

En su **alegato de clausura**, el fiscal agregó que la prueba incorporada por los acusadores, consistente en el relato de la víctima y de su madre, tuvo detalles importantes que coincidieron con los hallazgos de las pericias incorporadas a los autos, en el contexto del Protocolo de Estambul. El relato no es inventado, en tanto el menor hizo una sindicación precisa en contra del acusado. Los testigos de cargo eran parte de la misma institución, lo cual era un escollo importante para la Fiscalía. Pese a ello, los testigos dieron cuenta de detalles relevantes. A vía ejemplar, hubo un período de tiempo en que las grabaciones del hecho se perdieron, según reconoció el teniente que declaró en el juicio.

La defensa alega falta de participación, empero, la propia víctima sindicó al imputado y ello armoniza con la declaración de la madre del ofendido.

Respecto del énfasis que la defensa puso de algunas piezas del sumario administrativo, recalcó que en el propio sumario se indica que la conclusión del mismo no obsta a otras responsabilidades para el investigado.

Pide veredicto condenatorio.

En la **réplica** reiteró sus alegaciones.

CUARTO: Alegatos del acusador particular. Que, en su alegación de apertura, el INDH manifestó que se está no sólo ante la infracción de normas penales, sino también instrumentos internacionales. Cita el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Villagrán vs. Guatemala”. La CIDH señaló que en ese caso se infringió no sólo la libertad personal, sino también los derechos de la Convención sobre los derechos del Niño y la Convención de Ginebra contra la tortura. Se trató de un control de identidad que derivó en una detención, que fue declarada ilegal en la audiencia de control de la detención. En la audiencia de control el propio Ministerio Público empleó principio de oportunidad, pues se trató de un llavero que tenía un set de elementos, no sólo una mininavaja.

Además, carabineros no permitió la visita de la madre del ofendido a su hijo en la unidad policial. El acusado trasladó al acusado desde la celda al baño porque ahí no hay cámaras, y en ese lugar lo golpea.

Enfatizó que se trató de apremios ilegítimos y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En su **alegato de clausura**, agregó que la conducta del agente fue desplegada en contravención a la Constitución y a los tratados internacionales



en materia de derechos humanos, sin perjuicio del quebrantamiento de la normativa interna de Carabineros de Chile, respecto de personas privadas de libertad al interior de unidades policiales, como se indica en el Reglamento N° 10 de la institución.

Hizo presente que el ofendido fue privado de su libertad de manera ilegítima, como lo declaró el juez de garantía, sin perjuicio de otras ilegalidades como obligarlo a desnudarse y realizar ciertos ejercicios físicos, como sentadillas.

Invocó la agravante del inciso segundo del artículo 150 D del Código Penal.

Pidió veredicto condenatorio.

En la **réplica** reiteró sus alegaciones.

QUINTO: *Alegatos de la defensa.* Que, en su **alegato de inicio**, la defensa indicó que, en el contexto de la detención, se indicó que el ofendido portaba un arma blanca, un cortapluma, no un llavero. También se dijo que el menor fue bastante agresivo con la funcionaria que iba en bicicleta. No desconoce los golpes, sino que plantea la duda sobre si acaso podrán los acusadores probar que fue el acusado quien agredió a la presunta víctima. Había muchos funcionarios en ese momento, y hubo una clara agresión (ofensas y golpes) contra una funcionaria de Carabineros. Luego, no se puede demostrar que fue el acusado el que propinó los golpes al ofendido y no otro carabinero.

En su **alegato de cierre** agregó que que la detención del menor se debió a la reacción que este tuvo ante el control de identidad, siendo agredido ya en ese momento por funcionarios de Carabineros, pero sin lesiones visibles.

Ahora bien, en cuanto a las lesiones del acusado luego de la presunta agresión en la unidad policial, se pregunta por qué un grupo de carabineros detendría sólo a un menor en una plaza, y por qué los carabineros se concertarían para agredirlo ¿No será que el presunto ofendido reconoce a su representado porque es la persona con la que más interactuó? ¿Cómo se explica que el imputado le haya llevado un sandwich estando el adolescente recluido en su celda?

El teniente Arratia manifestó que, a lo largo del video que él pudo observar, vio a varios funcionarios de carabineros ir al sector de calabozos, por lo que la agresión pudo haber sido cometida por cualquier otro carabinero. La investigación administrativa, que incluye varios informes, entre ellos el de Labocar, en ninguna parte concluye que hay responsabilidad del acusado ni de



otros carabineros que también fueron indagados administrativamente por estos sucesos.

Por otro lado, el teniente Arratia reconoció que se perdieron de 7 a 10 minutos, pero ello se debió a un problema de formato al momento de reproducir el video ¿Cómo alguien podría adulterar un video de una grabación de 10 horas, en solo 20 a 25 minutos? La verdad es que esto se debe a mala tecnología, y que los registros solo se mantienen cinco días corridos. Pidió la absolución de su representado.

En la **réplica** reiteró sus alegaciones.

SEXTO: Declaración del acusado. Que, en presencia de su defensor, el acusado fue debida y legalmente informado acerca de los hechos materia de la acusación fiscal y particular y, en la oportunidad que señala el artículo 326 del Código Procesal Penal, advertido del derecho a guardar silencio, manifestó la voluntad de acogerse a éste.

SÉPTIMO: Convenciones probatorias. Que los intervinientes no acordaron convenciones probatorias.

OCTAVO: Hechos acreditados. Que esta Sala del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, ponderando con libertad los elementos de prueba incorporados al juicio, según lo prescribe el artículo 297 del Código Procesal Penal, pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, arribó a una decisión condenatoria, según reza en el veredicto leído en audiencia, al tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, los hechos materia de la acusación.

“El 21 de mayo de 2018, cerca de las 16:30 horas, el adolescente Patricio Antonio Alvarado Meza, nacido el 24 de diciembre de 2002, de 14 años a esa data, se encontraba en la plaza Arturo Prat de Quilpué junto a unos amigos, todos también menores de edad, siendo objeto de un control de identidad por parte de personal policial, resultando detenido Alvarado Meza por el presunto delito tipificado en el artículo 288 bis del Código Penal. El joven fue trasladado a la Segunda Comisaría de Carabineros de Quilpué, dónde quedó a cargo del cabo 1º Sebastián Andrés Quiroz González.

Encontrándose en el interior de una celda, la víctima concurrió al baño ubicado en el sector de calabozos, lugar donde el acusado Quiroz



González lo agredió con golpes de pies y puños en su cabeza y en distintas partes del cuerpo.

Producto de lo anterior, el adolescente Patricio Antonio Alvarado Meza resultó con lesiones consistentes en contusión nasal, aumento parietal izquierdo, equimosis en región interna del muslo izquierdo, eritemas lineales en ambas muñecas, sangramiento de nariz y boca, de carácter leve””.

NOVENO: Prueba de los acusadores. Que para el establecimiento de los hechos y la participación que en los mismos le habría cabido al acusado, el Ministerio Público y el INDH rindieron las siguientes pruebas, incorporadas en la audiencia de juicio oral, que se encuentran en el registro de audio respectivo:

I. Testimonial

1) Patricio Antonio Alvarado Meza, cédula nacional de identidad N° 21.203.562-9, 19 años, estudiante, con domicilio reservado, quien al **fiscal** expuso que está citado por haber presentado una querella contra un funcionario de carabineros que lo agredió el 21 de mayo de 2018. A esa época tenía 14 años, estaba en segundo medio, su peso no superaba los 50 kilos, no medía más de 1 metro con 50 centímetros, y estaba estudiando en un colegio particular de Quilpué.

Ese día 21 de mayo de 2018 salió en la mañana de su casa, era feriado. Fue a la playa a Viña del Mar. Estuvo ahí hasta las 16:00 horas, en que llegó al centro de Quilpué con tres amigos Se hizo un procedimiento policial por control de identidad, donde el resultó detenido y los amigos amedrentados y arrancaron. Lo detuvieron y le tiraron la bicicleta encima. Estaba en la plaza vieja de Quilpué, Estaba en compañía de Maximiliano, Miguel y Aaron, todos menores de edad, entre 14 y 15 años. Fue controlado, pero no le dijeron el motivo de control. Carabineros siempre se justifica en que es un control preventivo,

Entregó el carné, llegó una bicicleta de carabineros por detrás y lo atropelló en su pierna izquierda. Eran tres funcionarios los que hicieron el control: dos hombres y una mujer. La carabinera andaba a pie y los dos hombres en bicicleta. Le quitaron sus pertenencias: un bolso de 40 centímetros de alto por 20 de ancho, de color negro. No le encontraron nada ilegal. La carabinera le sacó su gorro y lo golpeó en la cara con el mismo gorro del testigo. Perdió el control porque lo estaban agrediendo. Lo agarraron, llegó otro



carabinero y lo tomaron detenido. Después llegó una patrulla que estaba de punto fijo en la plaza, estacionada.

Posteriormente, llegó otro carro policial para el traslado, en el cual había dos funcionarios hombres, de unos 40 a 50 años, quienes lo llevaron al Hospital de Quilpué para constatar lesiones, lo cual no se hizo porque había mucho tiempo de espera, por lo que lo llevaron al SAPU de Pompeya Sur. En este último lugar le constataron lesiones, pero no había hasta ese momento.

Luego lo llevaron a las dependencias de la 2da. Comisaría de Carabineros de Quilpué. Ingresaron por el costado derecho donde hay un portón negro, y por ese sector hay una puerta directa a los calabozos. Llegó a este lugar no más allá de las 18:00 horas. El control de identidad fue como entre las 16:00 y las 17:00 horas.

Lo bajaron esposado del carro policial, lo cual fue chocante para él pues en su familia no hay delincuentes. Entraron a la unidad policial y comenzaron las burlas de los mismos funcionarios, demostrando que ellos sí podían detenerlo sin motivo, si ellos querían. No tuvo lectura de derechos, tampoco se hizo el llamado telefónico a su familia informando de su detención, ni se le explicó el motivo de su detención en ningún momento, durante las 10 horas en que estuvo detenido.

Eran hartos funcionarios los que se burlaban de él, empezando por los mismos aprehensores. Se juntaron fuera del calabozo unos 7 carabineros sólo para burlarse de él.

Luego, lo pasaron a la celda de menores de edad donde estuvo solo. Estaba en la celda más lejana al baño. Estaba sentado en una silla e iba a dormir, había una frazada. No tenía sus pertenencias y sus cosas, pues se las quitaron. Incluso le hicieron quitarse toda su ropa, hasta el bóxer. Sólo tenía 14 años y le afecta mucho más ahora lo que pasó, que entonces.

Se durmió y en eso el mismo funcionario que está hoy en el juicio, el cual no sobrepasa 1 metro con 65 centímetros de altura, contextura gruesa, piel morena y pupilas dilatadas. Se le acercó como a las 22:00 horas, cuando su madre se había enterado que él estaba detenido porque un amigo de la víctima fue a avisarle a ella. Sin embargo, jamás dejaron que su madre lo viera, pues ya le habían pegado cuando ella llegó a la Comisaría.

El sujeto se acercó a la celda, le pegó una patada a sus pies, le abrió la reja y le dijo “*saca la silla*”. El testigo lo hizo. El sujeto agregó: “*Métela al baño*”, lo que también hizo. Luego, el individuo lo pescó del cuello, lo tiró



contra la pared y le pegó un manotazo en la cara, a mano abierta. Luego le tiró patadas, le pegó combos, lo increpó e insultó: *“esto te pasa por hueón pendejo de mierda. Conchatumadre, cabro culiao, ahueonao”*. El funcionario lo tiró al piso y le pegó patadas en el suelo. El ofendido dice que jamás le devolvió un golpe y solo atinó a cubrirse la cara con sus manos. Dice que no sabía de la existencia del funcionario hasta ese día pues nunca lo había visto.

A la fecha no sabe cuáles fueron los motivos del sujeto para agredirlo. Estaba vestido con uniforme de carabineros, pero sin sus distintivos con nombre y grado.

Esto duró unos 5 minutos. Fueron varias patadas, combos y manotazo a mano abierta; por lo menos unas 50. Le pegó en la cara, lo ahorcó, le pegó combos en la nariz, en la parte superior de la cabeza. En ese tiempo tenía frenillos y le quedaron incrustados en los labios. Se desvió su tabique nasal para toda la vida.

Esto ocurrió al interior del único baño que había, en el sector de calabozos. Era una puerta amarilla la del baño. Su madre llegó a los 30 minutos desde la agresión. De hecho, él mismo sujeto que lo agredió lo identificó en la mañana porque decía “S. Quiroz. G”. El sujeto fue al calabozo a modo de burla y le dijo *“oye, vino tu mamá poh hueon. Dijo que te pegáramanos y que te sacáramos la conchasumadre”*.

Habló con su madre al otro día, quien le comentó que jamás le había dicho eso al funcionario policial. Según su madre, el carabinero le dio que no podía verlo, y ella no insistió pues asumió que él estaría resguardado por quienes legalmente debían cuidarlo al encontrarse detenido. Le dijeron a su madre que él estaba detenido, aunque no le explicaron bien, pues los carabineros no tenían claridad sobre qué iban a hacer con él.

Se le pidió el número de teléfono de su madre, pero puede que se haya equivocado en el momento y no pudieron comunicarse con su mamá. Su madre nunca le había levantado la mano, por lo que es imposible que ella haya autorizado a otro para que lo hiciera.

Cuando terminaron de golpearlo, el sujeto le dijo que se limpiara bien y que se sacara la sangre: *“Límpiase bien conchatumadre”*. Tenía sangre en la nariz y en la boca. Era un sangrado bastante grande. De hecho, escupió sangre en el calabozo. El acusado le hizo lavarse la cara y no lo dejó salir hasta que estuviera limpio. Se limpió con confort,



Regresó a la celda y le pidió a otro carabinero que lo llevaran a constatar lesiones, aduciendo que otro funcionario lo había golpeado. El carabinero accedió de buena manera, pero escuchó que le decían “*cómo se te ocurre eso ahueonao, ¿vos soy hueón?*”. El carabinero le dijo que no se podía y que le había ido mal.

Se quedó en el piso, sin silla, y llegó el mismo agresor. Le empezó a decir que había llegado su madre y que lo que le pasó era un “premio” que él se merecía, y que su madre estaba de acuerdo con la golpiza.

Posteriormente, el sujeto va, parece que le dio cargo de conciencia, lo saca y le da una pastilla blanca, redonda y grande. Algo para dormir o algún analgésico. Él insistió en que lo llevaran a constatar lesiones, pero eso le fue negado. Después de tomarse la pastilla, se quedó dormido.

Se despertó como a las 04:03 AM. El mismo funcionario fue a la celda y le preguntó si quería algo para comer. Le trajo una hamburguesa italiana y se la introduce a la celda. Siguió durmiendo, lo despertaron como a las 08:00, le tomaron las huellas y abajo seguían los otros carabineros ufanándose de su detención y de sus poderes. Lo subieron, lo sacaron de la celda y lo llevarían al Juzgado de garantía. En el traslado el agresor todavía estaba en funciones, tenía sus distintivos y le vio el nombre y rango, pero no está seguro del rango.

Lo subieron a la patrulla y lo llevaron al tribunal. Entró por la parte trasera y fue recibido por Gendarmería, entregando sus pertenencias. Era el único menor de edad ese día. Habló con su defensora, a quien le contó todo lo que había pasado. Y ahí se enteró por qué estaba detenido, según el parte por porte de arma blanca. Jamás portó un arma blanca. No mostraron imágenes ni había fotografías en el parte. La defensora le explicó el motivo de la detención y él le contó lo mismo que ha dicho hoy. La defensora le dijo que iba a salir todo bien. Luego, lo llevaron a calabozo después y pasó a control de la detención.

El juez de garantía quedó impactado con el relato de carabineros, porque ellos decían que corría, gritaba y les pegaba a los policías. La defensora dijo que él quería hablar. El testigo mostró su polera, y su rostro, por lo que se hizo la denuncia al Ministerio Público. La causa por porte de arma blanca terminó por principio de oportunidad, aparte que las pruebas no estaban.

Ha participado en cinco diligencias diferentes. Una es la investigación administrativa. Lo llevaron a Valparaíso a una comisaría grande donde lo atendió la teniente de apellido Montenegro, quien lo hizo declarar y reconocer un set de fotografías con 20 funcionarios distintos, logrando identificar al



sujeto. Luego, de Dipolcar fueron dos funcionarios a su domicilio, quien le exhibieron otro set de fotografías y volvió a identificar al funcionario por fotos.

La Fiscalía le tomó declaración en Quilpué. También el peritaje físico de las lesiones en el Servicio Médico Legal, donde él señaló donde tenía los golpes. Por último, hubo un peritaje psicológico.

Producto de la agresión quedó con el hueso de la nariz desviado, quedó cóncavo hacia el lado izquierdo. Respira más por un lado que por el otro y tiene una protuberancia en la nariz, que no se ve por el efecto del ácido hialurónico.

Desde el punto de vista psicológico, quedó con miedo de salir a la calle y que otro carabinero se sienta con el poder de hacer lo que quiera con él. Ha hecho terapia psicológica y tratamiento psiquiátrico. Lo atendió Denis Gómez, psiquiatra, Rodolfo Pérez de Arce, que es su psicólogo hasta el día de hoy.

No puede conciliar el sueño, no ha vuelto a ir a la plaza vieja ni acercarse a la 2da. Comisaría. Estudia segundo año de psicología.

Podría explicar todo esto como un trauma que le quedó y que debido llevar por cinco años, y que ha afectado también a su familia. Antes era delgado, pero el proceso lo hizo engordar por la pena, la rabia de sentirse vulnerado. Agradece haber sido escuchado.

Se le exhiben fotografías del set 1. N° 1: se ven sus ojos distorsionados, el tabique pronunciado y los labios hinchados por los golpes. La fotografía fue tomada el 22 de mayo de 2018, máximo a las 14:00 horas, pues salió a las 11:00 y fracción del Juzgado de Garantía. **N° 2:** sangre de él en la polera, que salió de la boca y la nariz. Todas las fotografías son del mismo día y hora, en su domicilio. **N° 3:** pronunciación en la nariz. **N° 4:** ahí se ve el pronunciamiento de la nariz, que antes era normal, pareja, respingada. **N° 5:** rasguños en antebrazos por los golpes, y se ven también las esposas. **N° 6:** se ven las marcas de zapato de las patas que recibió en la espalda, a la altura del hombro izquierdo y el costado del hombro derecho. **N° 7:** sangre en la polera, golpes en la cara, en la muñeca. En el cuello había marcas de golpes. **N° 8:** Esta se tomó en el Hospital de Quilpué, luego de la audiencia de control de detención. Le hallaron lesiones: desvío del tabique nasal, moretón en el muslo bastante grande, marcas en el cuello a rojo vivo, marcas en los brazos, en la espalda. **N° 9:** su nariz desviada hacia el lado.

Declaró en el sumario administrativo. Jamás tuvo acceso a ver cámaras. No sabe si hay material fotográfico o videos de la comisaría. Sólo se le informó que se perdieron siete minutos de grabación. Esto lo supo porque su madre hizo



diligencias en la Comisaría, y el teniente Diego Arratia le dijo que cuando se paró a buscar un *pendrive* se perdieron las grabaciones. El teniente logró observar las cámaras, y ve cuando lo sacan. Recuerda que el teniente dijo que él vio cuando estaba sangrando de nariz en el calabozo, pero que era normal pues por el estrés cualquier joven podía sangrar de nariz.

Reconoció al acusado en la sala de audiencia.

Lo que quiere es que la persona que le hizo daño físico y psicológico se haga responsable. Nadie está sobre la ley y que es malo que alguien abuse de sus poderes, menos aún de un menor de edad. No quiere que ningún niño más se vea afectado como le pasó a él. No gana nada con esta denuncia. Sólo pide que quien comete un error sea sancionado, pues nadie está sobre la ley.

A la **querellante** contestó que el día de su detención andaba con polera blanca, un jean azul, zapatillas blancas marca Zara, un bolso cruzado de color negro, su chaqueta bomber Zara y un gorro negro marca Adidas. En el bolso traía su billetera, con \$25.000 en efectivo, las llaves de su casa, un parlante, su reloj, un anillo y su celular.

Cuando comenzó el control de identidad, se acerca el funcionario en bicicleta, luego la carabinera que le da el golpe en la cara con el gorro. Les molestó a los policías que él no quiso sacarse el gorro en un espacio abierto. Entregó el bolso, pero cuestionó la revisión de sus vestimentas. Los carabineros no encontraron nada ilícito.

La carabinera lo golpeó. Él se ofuscó un poco por la agresión y el trato como delincuente. El otro carabinero lo atropelló con la bicicleta y le dijeron que se iba detenido. Jamás en su vida ha agredido a algún funcionario de Carabineros.

Vio en todo momento al acusado, desde que llegó detenido a la Comisaría.

Al salir de la audiencia en el Juzgado de Garantía fue a constatar lesiones al Hospital de Quilpué. En cuanto al peritaje psicológico del Servicio Médico Legal, se le preguntó su contexto familiar, lo que le gustaba hacer, y cómo le ha afectado el proceso en todo este tiempo. Iba en segundo medio, el cual repitió por el estrés postraumático que le produjo la situación.

A la **defensa** respondió que fue a constatar lesiones al Hospital de Quilpué y luego al SAPU Pompeya Sur. El golpe de un gorro y la rueda de la bicicleta no aparecían como lesiones. El acusado no mencionó esas lesiones, pues lo trataron súper mal y o tironeaban para todos lados. Se ofuscó,



cuestionando de palabra por qué querían agradecerlo y por qué querían detenerlo.

Fue una reacción física y psicológica natural, pero jamás insultó ni agredió a nadie. Se ofuscó internamente y trató de mantener la calma ni se opuso a la detención. Esta actitud fue igual con todos los funcionarios. La ofuscación fue interna.

En la 2da. Comisaría de Quilpué se burlaron de él, pero no sabe por qué lo hacían. Por el tiempo transcurrido no sabe cuántos eran.

No ha tenido acceso a la carpeta investigativa, por tanto, no ha revisado los documentos.

El funcionario pateó la celda y le pidió la silla. Identificó al funcionario por su aspecto físico. La golpiza duró como 5 minutos. Se lavó como unos dos minutos para que parara el sangrado de la nariz.

Dio un número de teléfono que no recuerda, para que se enterara su madre que había sido detenido.

El mismo funcionario lo obligó a tomarse la pastilla blanca El envoltorio se lo llevó él para botarlo. Siempre ha dicho que el acusado lo agredió, desde el día 1.

En la carpeta dijo que su agresor era el señor González, pues es el segundo apellido del imputado: “S. Quiroz. G”. Cree haber escuchado que en la Comisaría le decían así.

No sabe cómo terminó el sumario administrativo. Menos aún sabe cómo terminó la diligencia de Dipolcar.

A una **pregunta aclaratoria del Tribunal** contestó que, al salir de la audiencia en el Juzgado de Garantía, fue a constatar lesiones al Hospital de Quilpué fue con su mamá y con su tía.

2) Elisa Andrea Meza Quilodrán, cédula de identidad N° 13.549.399-6, soltera, ejecutiva, 43 años, domiciliada en Calle Gómez Carreño, N° 507, Quilpué, quien al **fiscal** expuso que está citada por los golpes que recibió si hijo el día que fue detenido en la plaza vieja de Quilpué. Le dice más “Antonio” a su hijo. Esto pasó el 21 de mayo de 2018, a las 16:00 o 17:00 horas. Su hijo estaba compartiendo con unos amigos en esa plaza.

Ese día su hijo le pidió permiso para ir a la playa, y luego volvió a la plaza vieja. Estaban sentados en un sector donde están los asientos de cemento y le contó que se acercó un carabinero en bicicleta a pedirles su carné de identidad. Su hijo preguntó por qué la hacían. Llegó una carabinera que le pidió



que se sacara el jockey, pero su hijo no se lo sacó, y ella se lo sacó de manera brusca, golpeándolo en la cara con su propio jockey. Su hijo seguía pidiendo por qué le hacían el control de identidad. Finalmente, lo detuvieron y lo tomaron a la comisaría de Quilpué. Eran tres carabineros en bicicleta, dos varones y una mujer.

En su casa viven cinco personas. Su hijo es bueno para hablar, se instruye mucho en distintos ámbitos. Coleccionaba billetes falsos o antiguos, salía con sus amigos constantemente a la plaza. No es una persona agresiva, pero siempre trata de hacer sus derechos y llegar a consensos con las personas. Puede que a veces a su hijo se le salga un garabato, pero no es agresivo ni tiene maltrato.

Una vez que él ingresó a la Comisaría le tomaron sus datos, lo llevaron a una sala, lo hicieron desnudarse hacer sentadillas, todo el rato se burlaban de él, No le permitieron hacer llamados ni le dijeron por qué estaba detenido. Le decían que lo iban a golpear. Luego fue a una celda donde estaba solo. Todo el rato su hijo preguntaba por qué estaba detenido, pero nadie le dijo el motivo.

Ella se enteró que estaba detenido por un amigo de él, pues llamaba a su teléfono y sonaba apagado. El muchacho le dijo que estaban afuera de la comisaría y los policías le dijeron “cabros tales por cuales, váyanse, a su amigo no lo vamos a soltar”. Ella fue a la comisaría, y ahí le dijeron que no podía verlo, no podía entregarle nada, ni siquiera ropa de abrigo. Ella se devolvió tranquila pues estaba a cargo del personal policial.

Logró identificar al funcionario en dos peritajes que le mostraron: en el sumario y en otra actuación. El sujeto se llama Sebastián Quiroz González, y no le dio motivos para no ver su hijo: sólo que no estaba permitido y que debía esperar hasta el otro día en el control de detención.

Fue al tribunal y fue chocante verlo, pues tenía moretones en su cara, y emocionalmente estaba muy choqueado y afectado. Vio los moretones en los ojos, su nariz hinchada, también la sangre que tenía en la polera. Tenía una polera blanca, una polera negra y jeans.

Se le exhiben fotografías del set 1. Nº 6: la sacó la testigo, se ven dos manchas de pie: asume que lo pisaron pues son marcas de zapato. **Nº 7:** la polera manchada con sangre y las muñecas marcadas, la nariz levantada e hinchada. La parte interna de la cara estaba de llena de puntos. No le tomó fotos por dentro, pero tenía todo hecho tira por dentro debido a los frenillos que tenía.



También golpes en las piernas y emocionalmente su hijo estaba muy mal, confundido, no sabía lo que había pasado.

Lo imputaron por porte de arma blanca, Ella entendió que la detención fue ilegal y se aplicó principio de oportunidad, pues su hijo jamás había tenido situaciones como estas. Era solo un llavero con una parte para limpiar las uñas.

Cuando lo sacan del cuarto, después de haberlo desnudado, lo entraron a una sala. Su hijo trata de dormir, estaba en una silla, llega un funcionario y le dice “sale”. Lo llevó al baño y lo golpeó en ese lugar, contra la pared. Lo golpeó en la cara, en el cuerpo, en las piernas, lo golpeó contra la muralla, y le propinó golpes de puño en la nariz. Como sangraba mucho lo hizo lavarse la cara. Lo llevó luego al mismo lugar. Su hijo se sentía muy ahogado, empezó a escupir y sentía que se iba a desvanecer, pidiendo que lo llevaran constatar lesiones, pero nadie se acercó u lo dejaron ahí tirado. La persona que lo agredió en ese momento no tenía identificación, pero al otro día si la llevaba y quedó con sus iniciales: S. Quiroz. G.

Le dijeron que su hijo había sido golpeado y que harían una denuncia por maltrato. Por eso, al salir del juzgado fueron inmediatamente a constatar lesiones. El médico habló de volumen en la nariz, golpes en la cara, hematoma en el muslo izquierdo y las marcas en las muñecas.

Declaró ante la teniente Paula Montenegro en el sumario administrativo. Le mostraron un set de fotografías y logró identificar al funcionario. También narró los hechos como los ha explicado hoy. Cuando a ella la llamaron a declarar el 27 de mayo, domingo, el teniente Diego Arratia dijo que cuando él fue a tomar la captura de las cámaras, a buscar un *pendrive*, se pierden como 10 minutos de la grabación, por lo que no había cámaras del momento preciso. El teniente Arratia le dijo que vio cuando sacaron a su hijo de la celda, y cuando vuelve, ve que su hijo escupe y se limpia con la polera, pero le hace alusión que cualquier adolescente sometido a estrés podría tener sangrado de nariz.

Ella solo busca justicia y que esta sensación de vulneración que sintió no pase más. No gana nada con este juicio, sólo que no se produzca algo así nunca más. Ha tenido un quiebre familiar, pues su hijo tuvo un cambio de personalidad, y tuvo que pasar por varios médicos y psicólogos. Ella también resultó afectada, pues su hijo no mejoraba, perdió el año escolar y tuvo que cambiarlo de colegio. Revivir todo eso ha sido súper difícil para ellos como familia.



A la **querellante** dijo que su hijo iba en segundo medio y tenía entonces 15 años. Su salud era normal. Salía y disfrutaba de la vida. No era habitual que sangrara por la nariz.

A la **defensa** contestó que su hijo nunca ha manejado cortapluma, aunque sí cortaúñas. Tiene conocidos en carabineros y llamó a algunos para saber si su hijo efectivamente estaba en la 2da. Comisaría de Carabineros de Quilpué.

Siempre reconocieron al imputado como el autor del hecho y no ha habido otro nombre diferente. No ha pensado en demandar al Estado más adelante.

No sabe cuál fue el resultado de la investigación sumarial, aunque le preguntó muchas veces a la teniente Montenegro, quien le dijo que no podía informarle porque era un asunto administrativo interno.

No sabe cómo desaparecieron los minutos del video, pero fue lo primero que el teniente Arratia le dijo al hablar con ella. No sabe cuál fue el objetivo de haber eliminado esos minutos. No le dijo Arratia cuánto tardó en ir a buscar el *pendrive*.

Deduce las marcas de bototo en la polera de su hijo, pese a que la resolución de la cámara de su celular hace cinco años era pésima, pero ella pudo verlas bien.

No hubo preguntas del tribunal.

3) Mittsio Alexander Cabrera Álvarez, cabo 1° de Carabineros, funcionario de Dipolcar Marga Marga, cédula nacional de identidad 17.479.381-6, domiciliado en Caupolicán N° 82, Limache, quien al **fiscal** expuso que diligenció una orden de investigar de la Fiscalía Local, por presunto delito de apremios ilegítimos en contra de un menor de edad, cuya identidad no recuerda. Era contra un determinado funcionario de la 2da. Comisaria de Carabineros de Quilpué, como vigilante de calabozo. Era el cabo 1° Sebastián Quiroz González. Le tomo declaración al personal aprehensor, al personal de guardia, al personal denunciado y a otros testigos.

Le tomó declaración al ofendido, junto con su madre. El menor no dio otro antecedente pues ya había declarado ante el tribunal por parte de su abogada.

La madre, en cambio, narró determinados antecedentes que había tomado contacto con su abogada, y ella le dijo que la detención de su hijo fue ilegal. También dijo que recibió una llamada telefónica del teniente Arratia, quien le



dijo que no había grabaciones de la agresión de su hijo y que el estado del menor era producto de la detención. Agregó la madre que su hijo estaba con tratamiento psicológico, y que las lesiones no eran fracturas, pero si afectaban la nariz de su hijo. Mencionó que el teniente Arratia le dijo que la agresión fue al interior del baño y que ahí no había cámaras.

También declaró el personal aprehensor, quienes dijeron que el menor fue detenido por el delito de porte de arma cortante y amenazas a Carabineros. Todos coincidieron en que no habían agredido al menor.

El personal de guardia dijo que tampoco se había agredido al menor ni se percataron que otro funcionario lo hubiese agredido. El vigilante exterior dijo lo mismo, y el vigilante de Calabozo, Sebastián Quiroz González, dijo que en ningún momento había agredido al menor, ni le dio una pastilla para alguna dolencia, agregando que, ante las peticiones del menor, sólo se limitó a permitir su concurrencia al baño.

A cargo de la vigilancia del menor estaba el acusado en ese momento.

No recuerda que la madre haya dicho que Arratia le dijo que se perdieron minutos de grabación, pero sí que ella dijo que faltaban algunos minutos.

Al menor se le constataron lesiones y en primera instancia no las tenía. Pero, luego, el testigo fue al Hospital de Quilpué, donde pudo ver dos certificados: uno de lesiones, donde constaban lesiones leves; y otro en el cual se dejó constancia de haber realizado una radiografía al menor, sin lesiones.

El procedimiento fue el 21 de mayo de 2018, pero no recuerda la fecha de los certificados de lesiones.

También confeccionó un set fotográfico con 10 fotografías de funcionarios de carabineros, en el cual el menor reconoció al acusado (imagen N° 4) como el sujeto que le entregó una pastilla y le dio un alimento, una hamburguesa italiana. Más allá de eso no mencionó agresiones, pero no recuerda bien.

Para refrescar memoria se le exhibe el acta de reconocimiento fotográfico: Dipolcar Marga Marga de fecha 4 de diciembre de 2018: *“Habiéndoseme exhibido un set de aproximadamente de 10 fotografías, declaro reconocer al carabinero que aparece en la fotografía singularizada con el N° 4, como el funcionario que: me agredió, me entregó una pastilla de color blanco, después que me agredió, y posteriormente me entregó una hamburguesa italiana”.* Ahora recuerda el deponente que el menor agregó que el funcionario lo había agredido.



No recuerda de manera exacta la manera en que se eligieron las fotos, pero sí que eran sujetos de similares características y con funcionarios de carabineros de guardia. Sabe que existe un protocolo al efecto, pero en ese momento no lo conocía. Ahora sabe que debe haber 20 imágenes, separadas en dos cuadernos, y con sujetos de similares características.

También se tomó contacto con un capitán de nombre Cristián, quien dijo que las grabaciones tenían una duración de cinco días corridos. No había más testigos del hecho.

La unidad en la que se desempeña el testigo es Sipolcar. Estuvo ahí desde el 2014 a 2019, y desde esta última data forma parte de “Asuntos Internos” de la institución. También estuvo en el cuerpo de guardia y se desempeñó como vigilante de calabozo. Lo primordial de esa función es que las personas privadas de libertad no sean agredidas, y velar por la seguridad de todos los detenidos. Esto consta en el Reglamento N° 10 de Carabineros de Chile.

No tuvo contacto con el imputado ni con sus defensores.

La **querellante** no interrogó.

A la **defensa** contestó que el resultado de su investigación fue que en ese instante no había responsabilidades, pues no había medios tangibles que acreditaran la denuncia, ya que sólo se contaba con la declaración del menor. Todos los funcionarios estuvieron contestes en que no habían agredido al menor.

Desde el 2014 al 2019 le tocó ver muchas denuncias similares a la de este juicio. Que el testigo recuerde, el acusado señor Quiroz González no había sido denunciado antes.

En el reconocimiento fotográfico se colocan imágenes de sujetos similares. No recuerda cuánto se demoró la víctima en reconocer al acusado.

Las lesiones del Hospital de Quilpué eran leves.

No sabe qué tipo de pastilla le entregaron al menor.

La orden de investigar venía con la sigla “S. Quiroz G”.

Estando en Sipolcar ha hecho varias diligencias de este tipo. En determinadas órdenes se ha podido establecer responsabilidad funcionaria.

No hubo preguntas del tribunal.

4) Diego Arratia Yáñez, teniente de Carabineros, cédula nacional de identidad N° 17.559.821-9, casado, domiciliado en Los Topacios N° 1380, Quilpué, quien al **fiscal** expuso que el 24 de mayo 2018 realizó indagaciones



cuando cumplía funciones en Quilpué, a raíz de las diligencias que le encomendó por un oficio, el Juzgado de Garantía, por lesiones de un menor al interior de los calabozos cuando estaba al cuidado de carabineros en la 2° Comisaría de Quilpué. Fue entre el 21 y 22 de mayo de 2018. Le dijeron que fue agredido por un carabinero de apellido González, no sabe más.

Verificó el parte, corroboró los funcionarios que estuvieron de servicio ese día, y levantó cámaras de los calabozos. Nunca entrevistó al menor o su madre, sí a él le tomó declaración la investigadora del sumario. Fue cuidado el menor por el vigilante de calabozo, y era el acusado Quiroz González quien era de la Tenencia El Belloto. Durante el servicio en ocasiones el vigilante fue relevado por otros carabineros (cuando fue al baño, etc.).

Sobre las filmaciones hizo un levantamiento de las cámaras y las revisó. Vio al menor en el calabozo, él salió en varias oportunidades (3 o 4 veces) al baño que estaba al lado del calabozo. No pudo ver si entró solo o acompañado al baño el menor. No pudo determinar cuál o cuáles fueron los carabineros que lo acompañaron, porque el ángulo de la cámara no le permitió, y no lo puso verificar con otros antecedentes. No se registran cuando los detenidos van al baño. No consultó cuándo ocurrieron los hechos denunciados. El oficio no dijo a qué horas habría sido agredido. Las grabaciones que revisó fueron del ingreso a la salida del menor. Resalto de las 21.43 y las 22.00 horas. No sabe si las cámaras tenían horario de verano. Fue la cámara N° 4. Ahí vio que había el pie de un carabinero que abrió la puerta del calabozo, acompañó al menor al baño, y a los 2 o 3 minutos regresó, el menor se toca la nariz y se limpia con la polera. Pero no ve con que se limpia la nariz y si había sangre. No sabe si las cámaras eran en blanco o negro. Adjuntó esos registros en su oficio- y requirió que se investigara por la fiscalía administrativa. Esa grabación fue continua.

Recuerda que hubo fallas de la cámara en el computador, hubo problemas de formato, porque son cámaras antiguas. No recuerda lo que le declaró específicamente a la teniente. En un pendrive levantó los archivos desde la oficina del oficial de guardia, no recuerda si de ahí se paró a otro lugar.

En el año 2019 fue trasladado a Santiago, y no ha tenido contacto con el defensor.

El fiscal exhibió al testigo el set fotográfico 2: 1.- Es una imagen del calabozo de menores de 21 de mayo de 2018, 21:43 horas, y corresponde a parte del video que observó; 2.- La misma cámara a las 21:59 horas. Observó



continuamente todo ese lapso. Estaba el respaldo de ese archivo. En ese lapso no pudo saber quién cuidó al menor que se vio en la primera imagen.

No pudo determinar el motivo de la falla a que aludió.

El fiscal exhibió la copia de la investigación administrativa (N°19) foja 20 con lectura completa.

A la **querellante** respondió que tomó declaración a cuatro funcionarios que estuvieron de guardia. En una oportunidad entrevistó a la madre del menor cuando le entregó un DAU del 22 de mayo de 2018, y una receta médica, y los incorporó en los antecedentes.

Él solo tiene experiencia informática por su trabajo. La falla técnica la constató al tiempo de ver la grabación en el computador. Entre que salió de la comisaria y la revisión, no recuerda cuánto demoró. El informe tiene fecha 27 de mayo de 2018.

La querellante leyó la foja 91, y le exhibió el documento al testigo, reconociendo en el mismo su firma en la foja 91 y 92.

Al **defensor** respondió que él no tiene ningún vínculo con el acusado.

Las indagaciones dentro del procedimiento administrativo son para obtener antecedentes. En las cámaras no observó agresión alguna al menor, y no sale si la puerta tenía problemas. No sabe si las cámaras tenían algún tipo de clave.

Él vio de corrido las grabaciones, dos carabineros entraron para el relevo, pero no sabe quiénes fueron.

Los 4 funcionarios fueron el acusado, Richard Aros, y los carabineros Díaz y Pérez.

En la unidad policial había un policía González.

El menor se limpió la nariz y la polera, no observó en el menor algún gesto de dolor.

No recuerda si la madre dijo que tenía algún conocido en carabineros.

No vio estas denuncias en la 2° Comisaría de Quilpué donde estuvo el menor. En la Tenencia de El Belloto trabajó 3 años.

No alcanzó a distinguir al acusado en el calabozo de menores.

Los carabineros tenían distinta contextura física, no recuerda específicamente cómo eran porque tenía poca relación con ellos.

A la teniente Paola Montenegro declaró él. No sabe el resultado de la investigación de ella.



Él no pudo determinar cuál funcionario de carabineros habría cometido alguna agresión.

Él vio la secuencia entre las 21:43 y las 22.00 horas él lo vio. No pudo ver ese archivo en el computador, sí vio en las cámaras y lo respaldó en un CD.

No vio el disco compacto para no dañarlo, porque siempre vienen pericias.

No hubo preguntas del tribunal.

II. Pericial

1) **Ítalo Adrián Pastene Guerra**, soltero, psicólogo legista del Servicio Médico Legal de Valparaíso, domiciliado en Orella N° 911, Valparaíso, declaró acerca del informe pericial psicológico de acuerdo con el Protocolo de Estambul, expresó en la audiencia que examinó a Patricio Alvarado Meza el 21 de septiembre de 2022, de 19 años, con domicilio en Quilpué.

Expresó que el peritado recibió tratamiento por déficit atencional en la infancia, y psiquiátrico por trastorno de estrés post traumático y depresión, posterior a los hechos de este juicio.

El 21 de mayo de 2018 estuvo en la Plaza Vieja con amigos, y se acercan 3 policías a controlar la identidad, por una llamada anónima, y se negó al control por lo que fue tirado al piso. La mujer le quitó el jockey y lo golpeó con él, y fue detenido. Fue trasladado a constatar lesiones, pero había mucha gente y no la hicieron yendo a otro centro asistencial. Lo llevaron a la Comisaría de Quilpué, y quisieron los carabineros apropiarse de sus cosas, lo golpearon, lo insultaron, y fue forzado a desnudarse y a hacer sentadillas con los genitales expuestos. En el calabozo fue víctima de burlas y lo golpearon donde participaron varios funcionarios. Uno de ellos lo llevó a un baño, no había cámara según el peritado, y lo azotaron contra la muralla, fracturándole el tabique nasal, reconociéndolo en fotos como el acusado. Después fue devuelto al calabozo y escuchó la voz de su madre, le negaron contacto con ella y fue forzado a ingerir una pastilla blanca que lo hizo dormir.

Tenía 15 años y esto movilizó por completo su vida, teniendo miedo a salir de su casa, a la institución de carabineros, y su madre también recibió tratamiento psicológico. Tenía anhedonia, esto es, incapacidad para sentir placer, y se arraigaron en su psique miedos, tristeza, rabia, frustración.

La entrevista la hizo el año pasado, y le diagnosticó estrés post traumático.



Al fiscal respondió, que uso el Protocolo de Estambul, cuando se trata de delitos cometidos por agentes del Estado. La diferencia con el delito común es que el primero nace de guerras, y es cuidadoso para no crear revictimización, y es una instancia de reparación. Por lo mismo, habilita la no realización de test y se trata que se haga en una sola entrevista. Revisó los antecedentes que le envió la Fiscalía.

Actualmente lleva como 210 protocolos de la naturaleza que mencionó.

El periciado reconoció su informe, exhibido por el fiscal, donde se contiene, que el entrevistado dijo se perdieron 10 minutos de la cámara donde ocurrió la golpiza, la fractura del tabique nasal, y la toma del remedio que le dio el policía.

El periciado suspendió los estudios ese año y perdió el año escolar, buscó apoyo psicológico y psiquiátrico, y tenía quebrado el tabique nasal, lo que es importante a la edad de la víctima. También aumentó de peso y no hacía ejercicio. Y todo esto ocurrió a los años de ocurridos los hechos.

A la **querellante** respondió que revisó la hoja DAU, los diagnósticos médicos y psicológicos. Hacen alusión a la fractura del tabique nasal y al estrés post traumático.

En cuanto a si existe sintomatología específica del protocolo. El evalúa a víctimas de la dictadura y del estallido social. También en causas como esta donde hay estrés post traumático donde hay una fractura vital, en relación a su autoimagen y la protuberancia que tenía en la nariz, dejó los estudios, y todo lo que dijo. Se aisló de los grupos sociales de pares.

Al **defensor** respondió que el periciado fue detenido porque se negó al control de identidad, reaccionó de manera reactiva. Después vino la agresión de un carabinero con la bicicleta. Los carabineros quisieron apropiarse de un parlante y un anillo suyo.

Un 98% de los casos que ha visto en estas materias, presentan los síntomas que dice.

El periciado entró a estudiar psicología por estos hechos.

No hubo preguntas del tribunal.

2) Martha Pataquiva Wilches, médico perito forense del Servicio Médico Legal de Valparaíso, domiciliada en calle Orella N° 954, Valparaíso, quién va a declarar acerca del informe de lesiones N° 811-18.

El 24 de octubre de 2018 examinó en dependencias del Servicio Médico Legal a Patricio Alvarado Meza, en ese momento de 15 años, estudiante, quien



refirió que había sido golpeado en una Comisaría por un carabinero, con golpes de pie y puño, agregando que los golpes fueron en la cabeza, extremidades, abdomen, y que, además, había intentado estrangularlo con la mano.

El paciente añadió que el 21 de mayo de 2018 le hicieron un control de identidad. No le encontraron nada, pero igual se lo llevaron. Fue de mala onda. En la Comisaría le dijeron que saliera de la celda con una silla y que entre esa silla a un baño. El sujeto empezó a golpearlo y quedó como bloqueado un rato, tirado en el suelo. Mencionó que le había sangrado la nariz y la boca. Ocupaba entonces frenillos y que le había reventado los labios por dentro. La nariz le quedó levantada, algo que para él era la marca principal. Tenía moretones en la espalda, marcas en las muñecas por apretamiento de esposas, y también mencionó marcas de bototos en la polera. El menor agregó que no perdió la conciencia.

Fue atendido en el Hospital de Quilpué y, también, de manera particular.

Al examen estaba asintomático y en tratamiento por psiquiatría. Menciona que tuvo reposo total en casa por cuatro días, tomando analgésicos y relajantes musculares. Le dolía el cuerpo, pero se podía mover y dolor al tragar alimentos, al igual que líquidos. Mencionó que había marcas en el cuello por el intento de estrangulamiento.

Tuvo a la vista un DAU del Hospital de Quilpué de 22 de mayo de 2018, en el que destaca dolor en zona nasal, aumento de volumen de la zona prieta izquierda, equimosis nevara interna del muslo izquierdo, eritema en ambas muñecas, y toma de radiografía de cabeza y nariz, sin alteraciones. También tuvo a la vista otro documento de un pediatra de 23 de mayo de 2018, que menciona aumento de volumen del dorso nasal, de la región malar izquierda y equimosis del muslo izquierdo.

En el informe de radiografía de la Clínica Los Carrera de 20 de junio de 2018, se informa que no hay solución de continuidad en los huesos de la nariz, ni desviaciones del septo nasal.

En el informe de otorrino de 20 de agosto de 2018, se da cuenta que al examen físico no había signos de fractura nasal ni de desviación del septo.

Al examen físico ingresó por sus propios medios, estaba alerta, consciente y orientado. Lo único que llamaba la atención era una elevación del dorso de la nariz, como un lomo. La punta de la nariz estaba central, el sacro anterior también central, y depresión en los huesos de la nariz, pero no había puntos dolorosos. Las fosas nasales estaban permeables.



Neurológicamente el paciente estaba normal, sin otras huellas de trauma al examen.

Pudo ver tres placas radiográficas donde no observó fractura de los huesos de la nariz. Estaban los elementos de ortodoncia en ambos, pero no había nada a nivel óseo.

Concluyó que las lesiones eran compatibles con la acción de elemento contundente, de pronóstico leve, sanan salvo complicaciones de 10 a 14 días, con igual tiempo de incapacidad. Compatibles con la acción de un tercero.

En el examen evitaba hablar del hecho como tal, sino que se enfocaba en las consecuencias del hecho.

Al fiscal respondió que la nariz alomada responde a que el dorso de la nariz puede tener un lomo por trauma o por configuración natural, de nacimiento. No tuvo a la vista ninguna imagen previa para ver cómo era la configuración normal de la nariz del peritado, por lo que no podría definir a qué se debió este fenómeno concreto.

Cuando hay un trauma de las estructuras nasales, usualmente hace que haya un aumento del flujo sanguíneo en la zona. En un primer momento hay dolor, luego empieza todo el proceso inflamatorio, sea en la piel, en la grasa debajo de la piel o en la periferia del hueso. La inflamación empieza a verse en las primeras 24 horas.

El callo del hueso sólo se forma cuando el hueso se rompe, total o parcialmente. En este caso, pudo haber una microfractura o una fisura, si es que hubo callo en el hueso de la nariz.

La elevación del dorso nasal pudo deberse a un trauma, de confirmarse que no era de origen natural. El paciente refirió que la nariz le quedó levantada luego de la agresión, aunque no hablaba mucho del hecho en sí.

A la **querellante** contestó que, si el trauma en la nariz es en un adolescente de 14 o 15 años, a esa edad los huesos de la nariz tienen una configuración similar a la de los adultos, por lo que no hay consecuencias diferentes.

Un trauma contundente en la nariz puede generar un sangrado, pues hay mucha irrigación en esa parte del rostro, hay varios vasos sanguíneos. Por eso, el trauma fuerte genera sangrado de la nariz.

A la **defensa** dijo que no puede referir todas las lesiones, sino sólo las que extractó en el informe. Hay concordancia entre lo que refirió el menor y los



hallazgos médicos, tanto en el DAU del Hospital de Quilpué, y en el certificado del pediatra que lo examinó. En esta evaluación se habla de aumento de volumen malar, pero no está descrita la cavidad oral en los documentos, sólo está la parte de la mejilla. También, respecto de los golpes en las extremidades, concuerdan con lo que describieron los dos facultativos que lo atendieron. El intento de estrangulamiento no fue documentado por los médicos, aunque el paciente refirió dolor al tragar alimentos e ingerir líquidos.

Las lesiones eran leves, desde el punto de vista clínico, conforme con los antecedentes que tuvo a la vista.

Reitera lo de la configuración alomada en la nariz. Pudo ser de antes, pero no tiene manera de establecerlo, aunque el peritado no refirió traumas previos en esa zona.

No constató lesiones en la boca, sino solo aparatos de ortodoncia. Hace presente que las lesiones en la mucosa oral sana rápido, no más de 10 días y cicatrizan *ad integrum*, o sea, no dejan marca que puede evidenciarse tiempo después. En los documentos a la vista no se señalaba herida en la cavidad oral, pero sí un aumento de volumen en la región malar izquierda.

A unas preguntas aclaratorias del tribunal dijo que, en concreto, detectó policontusión: trauma de estructuras nasales, contusión del cuello cabelludo, contusión facial mala izquierda y contusiones del muslo izquierdo.

Esa lesión aparece en un documento de un pediatra, no estaba en la constatación de lesiones en el Hospital de Quilpué. Usualmente en el servicio de urgencia se describen lesiones más graves, descartando fracturas o lesiones más graves. Las lesiones menos llamativas tienden a no describirse, y también depende del tiempo que se haya tomado el facultativo con el examinado. Finalmente, si la evaluación es muy pronta puede ser que no aparezcan lesiones en el tejido inflamado.

III. Documental

1) Receta médica digital de fecha 23 de mayo de 2018, suscrita por el médico pediatra Rodrigo Díaz Lobos, correspondiente a la víctima.

2) Copia de DAU N° 2255726 de Hospital de Quilpué, de fecha 22/05/2018, correspondiente a la víctima.

3) Copia de acta de control de detención de fecha 22/05/2018, causa RUC N° 1800490734-1, RIT N° 2031-2018, del Juzgado de Garantía de Quilpué.



4) Certificado médico de atención del Centro de Otorrinolaringología Viña Salud, de fecha 20 de agosto de 2018, suscrito por la médica Tatiana Espinoza Brenet, correspondiente a la víctima.

5) Certificado médico de atención del Centro de Otorrinolaringología Viña Salud, de fecha 25 de agosto de 2018, suscrito por la Dra. Tatiana Espinoza Brenet, correspondiente a la víctima.

6) Copia de DAU N° 1095349 de Cesfam Pompeya, de fecha 21 de mayo de 2018, correspondiente a la víctima, que da cuenta del ingreso de constatación de lesiones.

7) Copia de parte policial N° 1915 de fecha 21 de mayo de 2018, confeccionado por la 2ª Comisaría de Carabineros de Quilpué.

8) Proservipol de fecha 21 de mayo de 2018, en que se detalla servicio del imputado.

9) Informe Psicológico del Centro Médico CERMECHI, de fecha 11 de febrero de 2019, suscrito por la psicóloga infantojuvenil Claudia Alfonso González, correspondiente a atención de la víctima.

10) Certificado médico suscrito por el médico psiquiatra infantojuvenil Dr. Denis Gómez Recabarren, de fecha 22 de febrero de 2019.

11) Nómina de detenidos del día 21 de mayo de 2018 correspondiente a la 2ª Comisaría de Quilpué.

12) Informe del médico otorrinolaringólogo Julio Méndez Guzmán, de fecha 15 de octubre de 2019.

13) Informe del médico psiquiatra infanto-juvenil Claudia González Larenas, de 14 de octubre de 2019.

14) Certificado de atención psicológica del Centro Integral de Salud Mental, de fecha 14 de octubre de 2019, suscrito por el psicólogo Rodolfo Pérez de Arce Peña.

15) Certificado médico suscrito por el médico psiquiatra infantojuvenil médico Denis Gómez Recabarren, de fecha 27 de agosto de 2019.

16) Hoja de vida de funcionario correspondiente al imputado.

17) Distribución de servicios diarios de la 2ª Comisaría de Quilpué correspondiente al día 21 de mayo de 2018.

18) Certificado de servicio del imputado correspondiente al día 21 de mayo de 2018.

19) Copia de investigación administrativa NCU 79543109.

20) Certificado de nacimiento de la víctima.



IV. Otros medios de prueba

1) Set de nueve fotografías correspondientes a la víctima.

2) Set de dos fotografías extraídas del circuito cerrado de televisión de la 2da Comisaria de Carabineros de Quilpué, adjuntas a sumario administrativo.

DÉCIMO: *Prueba de la defensa.* Que la defensa no rindió prueba autónoma.

UNDÉCIMO: *Análisis de la prueba de cargo.* Que las declaraciones de los testigos de cargo impresionaron al Tribunal como verosímiles, por cuanto fueron prestadas libremente, al ser interrogados con las formalidades legales durante el curso de la audiencia. Además, todos estos deponentes expusieron de un modo claro y preciso, dando detalles de lo que pudieron presenciar, mostrándose conocedores de los hechos sobre los cuales se refirieron por haber tomado conocimiento de ellos en forma directa, capaces de percibirlos por sus sentidos, y justificando las razones por las cuales pudieron presenciar lo que relataron.

Para una mejor comprensión de los hechos acreditados, es útil señalar que hubo presupuestos fácticos que no fueron objeto de debate por parte de los intervinientes, tales como la fecha, hora y comuna de ocurrencia de los hechos, a saber: el 21 de mayo de 2018, en horas de la tarde, en la plaza vieja de la comuna de Quilpué y, posteriormente, en dependencias de la Segunda Comisaría de Carabineros de esa ciudad; que se realizó un control de identidad al ofendido por parte de tres funcionarios de carabineros, dos varones y una mujer; que la víctima -Patricio Alvarado Meza- fue conducido por dichos funcionarios a la unidad policial en calidad de detenido, donde quedó a cargo del acusado en su condición de vigilante de calabozo; y que el ofendido a la sazón era menor de edad, pues constaba con 15 años de edad.

Establecido lo anterior, es preciso señalar que la prueba del Ministerio Público y del acusador particular, consistente principalmente en las declaraciones de **Patricio Alvarado Meza** y de su madre **Elisa Meza Quilodrán**, permitió probar los hechos enunciados, siendo sus declaraciones las que constituyeron el sustento de las restantes probanzas de cargo, toda vez que los episodios de violencia acreditados tuvieron lugar al interior de un recinto cerrado y sin acceso al público en general, sino sólo de personal policial, por lo que el testimonio de la víctima -refrendado por su madre- fue el único que podía entregar los detalles de tales episodios. Dichos relatos se confrontaron entre sí,



ponderándose luego de este ejercicio como fiables y como sustentos recíprocos de sus fiabilidades, en un ejercicio de ponderación en que ambos deponentes impresionaron al tribunal por el grado de concordancia entre sus aseveraciones, entregando ambos detalles en términos semejantes y dotados de verosimilitud.

Así, Patricio Alvarado Meza dio cuenta el cómo el día 21 de mayo de 2018 se juntó cerca de las 16:00 horas en el centro de Quilpué con tres amigos, todos menores de edad. Estaban en la plaza vieja de Quilpué, y fue objeto de un control de identidad por parte de tres funcionarios de Carabineros -dos varones y una mujer-, aunque el personal policial no le informó el motivo del control.

Agregó el deponente que él entregó su carné de identidad y que, debido a su vehemencia al exigir los motivos de la fiscalización, los policías le quitaron sus pertenencias consistentes en un bolso de color negro, no encontrando nada ilegal o ilícito. La carabinera le sacó su gorro y lo golpeó en la cara con el mismo objeto. Indicó que perdió el control porque lo estaban agrediendo. Lo agarraron, llegó otro carabinero y lo tomaron detenido. Después llegó una patrulla que estaba de punto fijo en la plaza, estacionada.

Posteriormente, llegó otro carro policial que lo llevó al Hospital de Quilpué para constatar lesiones, lo cual no pudo hacerse porque había mucho tiempo de espera, razón por la cual lo llevaron al SAPU Pompeya Sur. En este nosocomio no le constataron lesiones, pues hasta ese momento no las tenía.

Añadió que, cerca de las 18:00 horas, lo llevaron a las dependencias de la 2da. Comisaría de Carabineros de Quilpué, y nada más ingresar fue objeto de burlas por parte de los mismos funcionarios de la unidad policial, en un intento por mostrarle que ellos podían detenerlo sin motivo, si así lo estimaban.

Más tarde lo pasaron a la celda de menores de edad donde estuvo solo. Estaba en la celda más lejana al baño, sin sus pertenencias y sus cosas, pues se las quitaron. Logró conciliar el sueño en la celda, pero cerca de las 22:00 horas el mismo funcionario que está hoy en el juicio, el cual no sobrepasa el metro con 65 centímetros de altura, de contextura gruesa, piel morena y pupilas dilatadas, se le acercó a la celda, pegó una patada a sus pies, le abrió la reja y le dijo *“saca la silla”*, lo que el ofendido hizo. El sujeto agregó: *“Métela al baño”*, lo que también hizo la víctima. Luego, el individuo lo pescó del cuello, lo tiró contra la pared y le pegó un manotazo en la cara, a mano abierta. Luego le tiró patadas, le pegó combos, lo increpó e insultó: *“esto te pasa por hueón pendejo de mierda. Conchatumadre, cabro culiao, ahueonao”*. El funcionario lo tiró al piso y le pegó patadas en el suelo. El ofendido señaló que jamás le



devolvió un golpe y que sólo atinó a cubrirse la cara con sus manos. Su agresor estaba vestido con uniforme de carabineros, pero sin sus distintivos con nombre y grado.

La agresión duró unos cinco minutos. Fueron varias patadas, combos y manotazos a mano abierta, por lo menos unas 50. Le pegó en la cara, lo ahorcó, le pegó combos en la nariz y en la parte superior de la cabeza. En ese tiempo tenía frenillos y le quedaron incrustados en los labios. Quedó con su tabique nasal desviado para toda la vida. Todo esto ocurrió al interior del único baño que había en el sector de calabozos.

Continuando con su narración, Alvarado Meza indicó que, a esas alturas, su madre ya se había enterado que él estaba detenido porque uno de sus amigos fue a avisarle a su progenitora. Sin embargo, jamás dejaron que su madre lo viera, pues ya le habían pegado cuando ella llegó a la Comisaría. Su madre llegó a los 30 minutos desde la agresión. El sujeto fue al calabozo a modo de burla y le dijo *“oye, vino tu mamá poh hueon. Dijo que te pegáramanos y que te sacáramos la conchasumadre”*.

Explicó el ofendido al hablar con su madre al otro día, ésta le comentó que jamás le había dicho eso al funcionario policial. Según su madre, el carabinero le dio que no podía verlo, y ella no insistió pues asumió que él estaría resguardado por quienes legalmente debían cuidarlo al encontrarse detenido. Le dijeron a su madre que él estaba detenido, aunque no le explicaron bien, pues los carabineros no tenían claridad sobre qué iban a hacer con él.

Cuando terminaron de golpearlo, el carabinero le dijo que se limpiara bien y que se sacara la sangre: le dijo *“límpiase bien conchatumadre”*. Tenía sangre en la nariz y en la boca. Era un sangrado bastante grande. De hecho, escupió sangre en el calabozo. El acusado le hizo lavarse la cara y no lo dejó salir hasta que estuviera limpio. Se limpió con confort.

Regresó a la celda y le pidió a otro carabinero que lo llevaran a constatar lesiones, aduciendo que otro funcionario lo había golpeado. El carabinero accedió de buena manera, pero escuchó que le decían *“cómo se te ocurre eso ahueonao, ¿vos soy hueón?”*. El carabinero le dijo que no se podía y que le había ido mal.

Se quedó en el piso, sin silla, y llegó el mismo agresor. Le empezó a decir que había llegado su madre y que lo que le pasó era un “premio” que él se merecía, y que su madre estaba de acuerdo con la golpiza.



Posteriormente, el sujeto va, parece que le dio cargo de conciencia, lo sacó y le da una pastilla blanca, redonda y grande. Conjetura que debió ser algo para dormir o algún analgésico. Él insistió en que lo llevaran a constatar lesiones, pero tal petición le fue negada. Después de tomarse la pastilla, se quedó dormido.

Se despertó como a las 04:03 AM. El mismo funcionario que lo había agredido fue a la celda y le preguntó si quería algo para comer. Le trajo una hamburguesa italiana y se la introdujo en la celda. Siguió durmiendo, lo despertaron como a las 08:00, le tomaron las huellas y abajo seguían los otros carabineros ufanándose de su detención y de sus poderes. Lo subieron, lo sacaron de la celda y lo llevarían al Juzgado de garantía. En el traslado el agresor todavía estaba en funciones, tenía sus distintivos y le vio el nombre y rango, pero no está seguro del rango: su identificación policial decía “S. Quiroz. G”.

Lo subieron a la patrulla y lo llevaron al tribunal. Entró por la parte trasera y fue recibido por Gendarmería, entregando sus pertenencias. Era el único menor de edad ese día. Habló con su defensora, a quien le contó todo lo que había pasado. Y ahí se enteró por qué estaba detenido, según el parte por porte de arma cortante, algo que no era efectivo. De hecho, en la audiencia no se mostraron imágenes ni había fotografías de la supuesta arma en el parte policial.

Agregó el ofendido que en la audiencia mostró su polera y su rostro al juez de garantía, por lo que se hizo la denuncia al Ministerio Público. La causa por porte de arma blanca terminó por principio de oportunidad, aparte que las pruebas no estaban.

Ha participado en cinco diligencias diferentes. Una es la investigación administrativa. Lo llevaron a Valparaíso a una comisaría grande donde lo atendió la teniente de apellido Montenegro, quien lo hizo declarar y reconocer un set de fotografías con 20 funcionarios distintos, logrando identificar al carabinero que lo agredió. Luego, fueron dos funcionarios de Dipolcar (sic) a su domicilio, quienes le exhibieron otro set de fotografías y volvió a identificar al funcionario por fotografías.

La Fiscalía le tomó declaración en Quilpué. También el peritaje físico de las lesiones en el Servicio Médico Legal, donde él señaló donde tenía los golpes. Por último, hubo un peritaje psicológico.



Producto de la agresión quedó con el hueso de la nariz desviado, quedó cóncavo hacia el lado izquierdo. Respira más por un lado que por el otro y tiene una protuberancia en la nariz, que no se ve por el efecto del ácido hialurónico.

Desde el punto de vista psicológico, quedó con miedo de salir a la calle y que otro carabinero se sienta con el poder de hacer lo que quiera con él. Ha hecho terapia psicológica y tratamiento psiquiátrico. Lo atendió Denis Gómez, psiquiatra, Rodolfo Pérez de Arce, que es su psicólogo hasta el día de hoy.

No puede conciliar el sueño, no ha vuelto a ir a la plaza vieja ni acercarse a la 2da. Comisaría. Estudia segundo año de psicología. Podría explicar todo esto como un trauma que le quedó y que debido llevar por cinco años, y que ha afectado también a su familia. Antes era delgado, pero el proceso lo hizo engordar por la pena, la rabia de sentirse vulnerado.

Como se advierte, Patricio Alvarado Meza dio cuenta sobre cómo y por qué fue trasladado en calidad de detenido a las dependencias de la 2da. Comisaría de Carabineros de Quilpué; cómo y dónde había sido golpeado en su interior, además de los insultos que recibió y sobre el maltrato recibido en dicha oportunidad. El afectado reconoció haber “perdido el control” durante el control de identidad, pero sin agredir ni insultar al personal policial, demostrándose llano a contar todas las aristas de su vivencia, impresionado sus asertos como veraces desde que no buscó aligerar su comportamiento refractario ante el personal de carabineros.

Para apoyar el relato de la víctima los acusadores les exhibieron un set de **nueve fotografías**, en las que identificó su rostro con sus ojos distorsionados, el tabique pronunciado y los labios hinchados por los golpes; sangre de él en la polera, que salió de la boca y la nariz; rasguños en antebrazos por los golpes y la marca de las esposas; las marcas de zapato de las patadas que recibió en la espalda, a la altura del hombro izquierdo y el costado del hombro derecho; golpes en la cara, en la muñeca y en el cuello. Una de las fotos (la número 8) fue la única que se tomó en el Hospital de Quilpué, luego de la audiencia de control de detención. En ese nosocomio le constataron diversas lesiones: desvío del tabique nasal, un gran moretón en el muslo, marcas en el cuello a rojo vivo, y marcas en los brazos, en la espalda. Indicó la víctima que las otras ocho fotografías fueron tomadas por él y su familia en su domicilio el mismo día 22 de mayo de 2018, no más allá de las 14:00 horas, luego de salir de la audiencia de control de detención y de constatar lesiones acompañado de su madre y de una tía.



En la misma dirección, se tuvo a la vista el **dato de atención de urgencia N° U0002255726** de fecha 22 de mayo de 2018, donde consta que Patricio Antonio Alvarado Meza ingresó al Hospital de Quilpué a las 11:41 horas de ese día, siendo examinado por una facultativa médica a las 13:39 horas de ese día, la cual le diagnosticó “equimosis en región interna de muslo izquierdo de app dos centímetros de diámetro, eritema en ambas muñecas de forma lineal, sin impotencia funcinal (sic); con un pronóstico médico legal de clínicamente “leve”, y siendo dado de alta a las 14:47 horas del día señalado.

Asimismo, se tuvo a la vista una **receta médica digital** extendida por el médico pediatra Rodrigo Díaz Lobos, de fecha 23 de mayo de 2018, esto es, al día siguiente de la agresión y de la constatación de lesiones en el Hospital de Quilpué, donde el facultativo constató “aumento de volumen en zona de puente nasal y malar izquierda; erosiones lineales en muñecas y equimosis en muslo izquierdo”, diagnosticando una “contusión en la cara, muslos, muñeca y cuello por la acción de terceros”.

Igualmente, se consideró el **acta de la audiencia de control de detención** en causa RIT 2031-2018 del Juzgado de Garantía de Quilpué, iniciada a las 11:06 del 22 de mayo de 2018 y terminada a las 11:15 del mismo día, en la cual se lee que la detención del menor Patricio Antonio Alvarado Meza fue declarada ilegal por el juez de garantía y que el imputado realizó una denuncia en los siguientes términos: **“Imputado manifiesta que funcionario de la Segunda Comisaría de Carabineros de Quilpué, Cabo 1° González, le habría ocasionado lesiones”**, ante lo cual el Tribunal de Garantía ordenó oficiar al Prefecto, con copia al Comisario respectivo, a objeto de que informe lo pertinente respecto a la detención, “más aun tratándose de un menor de edad”, lo cual dio origen a un sumario administrativo para establecer los hechos y las responsabilidades del caso.

Adelantándonos a las alegaciones de la defensa, se debe recalcar que no existe confusión alguna en la víctima en cuanto a la identificación de su único agresor, pues si bien en el acta de la audiencia se dice que el carabinero que lo agredió sería un cabo 1° de apellido González, el segundo apellido del acusado es, precisamente “González”, y su rango se condice con el que se indicó en la señalada audiencia, todo lo cual fue explicado razonablemente por el ofendido en su declaración en estrados. Recordemos que el menor vio en el uniforme de su agresor la inscripción “S. Quiroz G”.



Adicionalmente, la defensa no cuestionó que los días 21 y 22 de mayo de 2018, el acusado efectivamente se encontraba ejerciendo sus labores como vigilante de calabozo en las dependencias de la 2da. Comisaría de Carabineros de Quilpué, y que su rango era el de cabo 1º, lo cual armoniza con el documento denominado “**Proservipol**” de fecha 22 de mayo de 2018, y con el **certificado de servicio** de fecha 26 de mayo de 2018, extendido por el Mayor Patricio A. Gómez Cuello, Comisario de la 2da. Comisaria de Carabineros de Quilpue, en el cual consta que **el acusado Sebastián Quiroz González, cabo 1º de Carabineros, de dotación de la señalada comisaría, el día lunes 21 de mayo de 2018 se encontraba de servicio se Segunda Guardia, en el horario que comprende entre las 20:00 a las 08:00 horas del día siguiente,** según libros y tablas de servicio que coexisten en la unidad.

Por su parte, la madre del ofendido -**Elisa Meza Quilodrán**- en lo esencial ratificó y corroboró los hechos narrados por su hijo Patricio Alvarado Meza. Indicó la deponente que su hijo le contó que una vez que él ingresó a la Comisaría le tomaron sus datos, lo llevaron a una sala, lo hicieron desnudarse hacer sentadillas y todo el rato se burlaban de él. No le permitieron hacer llamados ni le dijeron por qué estaba detenido. Le decían que lo iban a golpear. Luego fue a una celda donde estaba solo. Todo el rato su hijo preguntaba por qué estaba detenido, pero nadie le dijo el motivo.

Ella se enteró que su hijo estaba detenido por un amigo de él, pues ella lo llamaba a su teléfono, pero sonaba apagado. El muchacho le dijo que estaban afuera de la comisaría y los policías le dijeron “cabros tales por cuales, váyanse, a su amigo no lo vamos a soltar”. Ella fue a la comisaría, y ahí le dijeron que no podía verlo y que no podía entregarle nada, ni siquiera ropa de abrigo. Ella se devolvió tranquila pues estaba a cargo del personal policial.

Logró identificar al funcionario en dos peritajes que le mostraron: en el sumario y en otra actuación. El sujeto se llama Sebastián Quiroz González, y no le dio motivos para no ver su hijo: sólo le dijo que no estaba permitido y que debía esperar hasta el otro día en el control de detención.

Fue al tribunal y fue chocante ver a su hijo, pues tenía moretones en su cara, y emocionalmente estaba muy choqueado y afectado. Vio los moretones en los ojos, su nariz hinchada, también la sangre que tenía en la polera. Tenía una polera blanca, una polera negra y jeans.

Se le exhibieron fotografías del set 1. N° 6: la sacó la testigo, se ven dos manchas de pie: asume que lo pisaron pues son marcas de zapato. **N° 7:** la



polera manchada con sangre y las muñecas marcadas, la nariz levantada e hinchada. La parte interna de la cara estaba de llena de puntos. No le tomó fotos por dentro, pero tenía todo hecho tira por dentro debido a los frenillos que tenía. También golpes en las piernas y emocionalmente su hijo estaba muy mal, confundido, no sabía lo que había pasado.

Agregó la testigo que cuando sacaron a su hijo del cuarto, después de haberlo desnudado, lo entraron a una sala. Su hijo trató de dormir, estaba en una silla, llegó un funcionario y le dijo “sale”. Lo llevó al baño y lo golpeó en ese lugar, contra la pared. Lo golpeó en la cara, en el cuerpo, en las piernas, lo golpeó contra la muralla, y le propinó golpes de puño en la nariz. Como sangraba mucho lo hizo lavarse la cara. Lo llevó luego al mismo lugar. Su hijo se sentía muy ahogado, empezó a escupir y sentía que se iba a desvanecer, pidiendo que lo llevaran constatar lesiones, pero nadie se acercó u lo dejaron ahí tirado. La persona que lo agredió en ese momento no tenía identificación, pero al otro día si la llevaba y quedó con sus iniciales: **“S. Quiroz. G”**.

Le dijeron que su hijo había sido golpeado y que harían una denuncia por maltrato. Por eso, al salir del juzgado fueron inmediatamente a constatar lesiones. El médico habló de volumen en la nariz, golpes en la cara, hematoma en el muslo izquierdo y las marcas en las muñecas.

Declaró ante la teniente Paula Montenegro en el sumario administrativo. Le mostraron un set de fotografías y logró identificar al funcionario que agredió a su hijo. Allí también narró los hechos como los explicó en juicio.

Cuando a ella la llamaron a declarar el 27 de mayo de 2018, un domingo, el teniente Diego Arratia le dijo que cuando él fue a tomar la captura de las cámaras, a buscar un *pendrive*, se perdieron como 10 minutos de la grabación, por lo que no había cámaras del momento preciso de la agresión. El teniente Arratia le dijo que vio cuando sacaron a su hijo de la celda, y cuando vuelve, ve que su hijo escupe y se limpia con la polera, pero le hace alusión que cualquier adolescente sometido a estrés podría tener sangrado de nariz.

No constó en juicio algún antecedente que hiciera dudar a estos jueces de la credibilidad de los referidos testigos. Por el contrario, ambos testigos describieron con detalle la escena ocurrida en el baño del sector de calabozos de la Segunda Comisaria de Carabineros de Quilpué en términos muy similares, y no constó en juicio algún antecedente que hiciera dudar de la fiabilidad y honestidad de estos deponentes.



Los demás **testigos de cargo** posicionaron al adolescente en el lugar donde él dijo que fue abordado por el cabo 1° Sebastián Quiroz González, sin poder dar más detalles debido a que los sucesos acaecieron al interior de un recinto cerrado y sin acceso al público en general, desde que la agresión tuvo lugar en el sector de calabozos, al interior de un baño de la 2da. Comisaría de Carabineros de Quilpué. De ahí que es lógico que los acusadores no hayan podido contar con más testigos presenciales de la agresión, circunstancia que, además, permitió al encartado ejercer violencia en la persona de Alvarado Meza de manera solapada y clandestina.

Por su parte, la prueba **pericial, documentos, fotografías y otros medios de prueba** sirvió para corroborar la declaración de Patricio Alvarado Meza y de su madre, así como ilustrar al tribunal sobre la naturaleza, características y entidad de las lesiones causadas por el acusado Quiroz González al adolescente Patricio Antonio Alvarado Meza, las que –según manifestó la perita del Servicio Médico Legal Marta Pataquiva Wilchez– las lesiones eran compatibles con la acción de elemento contundente, y de pronóstico leve, sanando, salvo complicaciones, de 10 a 14 días, con igual tiempo de incapacidad; y compatibles con la acción de un tercero.

La defensa no formuló preguntas para desvirtuar la credibilidad de la víctima y de su madre, pues sólo se limitó a sostener que su defendido no había causado las violencias que se le imputaban, exigiendo a los acusadores pruebas que demostraran lo contrario, lo que en definitiva hicieron. La prueba de cargo demostró que Quiroz González violentó e insultó a la víctima menor de edad al interior de un baño del sector de calabozos de la 2da. Comisaría de Carabineros de Quilpué.

No surgió duda en cuanto a la acción desarrollada por el sujeto activo, ya que no dudamos de los asertos de la víctima de este juicio en tanto su relato se apreció veraz, sin atisbos de elementos que permitiesen entender o sospechar que buscaba perjudicar con sus imputaciones al acusado sólo por su condición de carabinero.

Tampoco le fueron dirigidas por la defensa preguntas a la víctima que hubieran mermado su veracidad, no fue preguntado en cuanto a enemistades sostenidas con el acusado anteriores a estos hechos, ni se buscó un por qué habría querido atribuirle a éste un actuar violento y agresivo, ni menos se indagó sobre una explicación distinta de la violencia que protagonizó. No le fue hecha a la víctima alguna pregunta que pudiese dejar ver que le haya asistido



alguna confusión en lo que vio o escuchó; limitándose el ofendido a responder a las preguntas que le fueron formuladas por los intervinientes con claridad y precisión.

De esta forma, no existió duda alguna sobre los asertos de los testigos de cargo, acreditándose de forma contundente los hechos descritos en la acusación, al ser consideradas las declaraciones de Patricio Alvarado Meza y de su madre, Elisa Meza Quilodrán, honestas, convincentes y no vislumbrándose alguna motivación tendiente a perjudicar a Quiroz, probándose así que el día 21 de mayo de 2018, alrededor de las 17:30 horas, el menor de 15 años Patricio Antonio Alvarado Meza fue detenido por funcionarios de carabineros, siendo esposado y trasladado hasta la 2da. Comisaría de Carabineros de Quilpué, lugar donde el cabo 1° de Carabineros Sebastián Andrés Quiroz González golpeó al adolescente en distintas partes de su cuerpo con golpes de pie y puño, además de insultarlo en reiteradas oportunidades. A consecuencia de las agresiones, el menor Patricio Alvarado Meza resultó con lesiones calificadas como clínicamente leves.

Finalmente, se tuvo a la vista el **certificado de nacimiento** de Patricio Antonio Alvarado Meza, en el cual consta que nació el 24 de diciembre de 2002, por lo que al 21 de mayo de 2018 tenía 15 años.

DUODÉCIMO: *Calificación jurídica de los hechos.* Que, en consecuencia, la unión lógica y sistemática de los hechos consignados en el fundamento séptimo de este fallo, y el análisis libre de toda la prueba ya reseñada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297 del Código Procesal Penal, permiten a este Tribunal, dar por establecido el ilícito penal de **apremios ilegítimos**, en grado de desarrollo **consumado**, previsto y sancionado en el artículo 150 D del Código Penal, en tanto de la prueba rendida no se observó que la violencia ejercida en contra del adolescente Patricio Antonio Alvarado Meza haya estado dirigida a obtener una confesión de su parte, inspirada en algún tipo de discriminación, o que el agente haya buscado su castigo por algún acto que se sospechara habría cometido, sino que más bien se observó la aplicación de malos tratos crueles y degradantes en contra de una persona que se encontraba privado temporalmente de su libertad, y bajo custodia precisamente del acusado, en el baño del sector de calabozos de la 2da. Comisaría de Carabineros de Quilpué, acción que a juicio de este tribunal constituye el delito de apremios ilegítimos establecido en el artículo 150 letra D antes referido.



A consecuencia de este análisis calificamos los hechos acreditados como **apremios ilegítimos**, desde el momento en que un empleado público, cabo 1° de carabineros en servicio activo, abusando de sus funciones de aprehensión y custodia de un detenido menor de edad, aplicó violencia desmedida, causó dolor, insultó e intimidó a un adolescente y, en consecuencia, aplicó tratos crueles y degradantes a una persona especialmente vulnerable y merecedor de protección atendida su minoría de edad.

Los tratos crueles se tradujeron en reiterados golpes de pies y puño en el cuerpo de Alvarado Meza y el intento de ahorcarlo con sus manos, acciones que le causaron dolor físico, sufrimiento y un lógico temor, ya que el cabo 1° Quiroz González ejecutó estas maniobras estando el adolescente esposado, en el suelo y sin posibilidad alguna de defensa.

Expuestos los supuestos fácticos de los elementos que dan cuerpo al delito de apremios ilegítimos, es oportuno hacer referencia al **peritaje psicológico** incorporado a juicio por el psicólogo del SML **Ítalo Pastén Guerra**, quién aplicó el Protocolo de Estambul al ofendido. Este profesional explicó que la tarea del protocolo es la de documentar hechos de maltrato y torturas de parte del Estado y sus agentes hacia los ciudadanos. Asimismo, explicó que cuando es el Estado quien comete el delito la repercusión en las víctimas es más grande a que si lo cometiera una persona natural, de ahí que, aplicando diversas metodologías, pudo concluir que el evaluado mantenía síntomas de estrés postraumático, pues solo tenía 15 años y esto movilizó por completo su vida, teniendo miedo a salir de su casa, a la institución de carabineros, y su madre también recibió tratamiento psicológico. Tenía anhedonia, incapacidad de sentir placer, y se arraigaron miedos, tristeza, rabia y frustración.

Agregó el perito que el ofendido debió suspender sus estudios el año 2018 y perdió el año escolar; que buscó apoyo psicológico y psiquiátrico, y tenía quebrado el tabique nasal, lo que es importante a la edad de la víctima. También aumentó de peso y no hacía ejercicio. Todo esto ocurrió a los años de ocurridos los hechos.

Por otra parte, cabe señalar que el Protocolo de Estambul de la Organización de Naciones Unidas, “Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, es dable destacar que su principal fin es el de aclarar los hechos, determinar medidas para impedir que se repitan y facilitar el procesamiento, y



cuando corresponda el castigo de sus responsables, pero no necesariamente de su aplicación y conclusión ha de colegirse que en un caso particular existió la acción de tortura. En este caso, el peritaje del señor Pastene en tanto introdujo los dichos de la víctima, permitió tener un antecedente más para evaluar su veracidad, e informó sobre el estrés postraumático que el adolescente padecía derivado de estos hechos, aumentando antecedentes para darle cuerpo a su fiabilidad, advirtiéndose que la figura de apremios ilegítimos sí se configuraba, sin ser su peritaje la única prueba que permitiese arribar a esta conclusión.

La calidad de funcionario público de Quiroz González no fue objeto de debate, demostrándose que al día 21 de mayo de 2018 se desempeñaba como cabo 1° de Carabineros en servicio activo, y que en tal calidad violentó, insultó y denigró a la víctima, en momentos en que el adolescente estaba bajo su custodia y resguardo.

En consecuencia, sobre la base de todas las argumentaciones vertidas, el tribunal llegó a la convicción, más allá de toda duda razonable, que los hechos probados son constitutivos del delito de apremios ilegítimos en el cual Sebastián Andrés Quiroz González intervino en calidad de autor, lo que a continuación se analizará.

DÉCIMO TERCERO. Participación. La participación del acusado en el delito indicado se encontró debidamente acreditada con las declaraciones de la víctima y de su madre, quienes lo identificaron, el primero en la sala de audiencia, y ambos en sede policial como el autor de las agresiones al adolescente Patricio Antonio Alvarado Meza, no abriéndose paso a duda alguna a este respecto, probándose que Sebastián Andrés Quiroz González intervino en el delito de apremios ilegítimos en calidad de autor en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal.

Precedentemente, hemos dado los argumentos por los cuales atribuimos credibilidad a las declaraciones a la víctima y su madre, y bajo este supuesto este tribunal adquirió la convicción de la imputación por ellos formulada, quienes aseveraron que fue el carabinero “S. Quiroz G.”, quien lo agredió al interior de un baño del sector de calabozos al interior del baño de la 2da. Comisaría de Carabineros de Quilpué.

Como se dijo más arriba, esta certeza la alcanzó el ofendido luego que el día 22 de mayo de 2018 vio el apellido de este funcionario en un parche que llevaba adherido en su chaleco: “S. Quiroz G.”.



Además, la madre de Alvarado Meza pudo interactuar con el acusado el 21 de mayo de 2018 cuando acudió a la 2da, Comisaría de Carabineros de Quilpué, motivo por el cual ambos deponentes pudieron identificar en sendas diligencias de reconocimiento fotográfico al acusado de este juicio como la persona que golpeó e insultó al adolescente Patricio Antonio Alvarado Meza en la forma que ya latamente se ha explicado en los motivos que anteceden.

DÉCIMO CUARTO: *Alegaciones de la defensa.* Que, como se dejó constancia en los alegatos de inicio y cierre, la defensa del acusado solicitó la absolución de su representado de los cargos formulados en su contra.

Al respecto, la defensa deberá estarse a lo expuesto en los fundamentos anteriores, en que el Tribunal tuvo por establecido el hecho punible, así como la participación a título de autor. Ahora, si bien el principal elemento de cargo lo constituyen los dichos del ofendido, a juicio del Tribunal su relato resultó creíble, como se reflexionó largamente en los motivos que anteceden. El contenido de la imputación surge del testimonio del afectado, que ha sido permanente en el tiempo, consistente y coherente en su contenido interno, corroborando su progenitora la descripción de los hechos que realizó su hijo Patricio.

Respecto de las supuestas inconsistencias en la prueba de cargo en cuanto a que el **sumario administrativo** incoado por Carabineros para determinar, tanto las circunstancias de la detención como la agresión de que fue víctima el adolescente Patricio Alvarado Meza el día 21 de mayo de 2018, no arrojó responsabilidad administrativa para el acusado ni tampoco para ningún otro funcionario de Carabineros, diremos que no se trata en lo absoluto de una inconsistencia, y menos de una contradicción, pues como es sabido, la responsabilidad administrativa y disciplinaria es completamente independiente y persigue fines diversos a la investigación y responsabilidad que se persigue en un proceso penal. Es más, el propio sumario administrativo se encarga de señalar esto de manera expresa.

Por otro lado, carece de relevancia penal que el testigo de cargo teniente **Diego Arratia Yáñez** haya reconocido que se perdieron cerca de diez minutos de la grabación del sector del baño de calabozos de la 2da. Comisaría de Quilpué los días 21 y 22 de mayo de 2018, pues las agresiones tuvieron lugar al interior del baño de dicho sector de calabozos, lugar donde -naturalmente- no había cámaras, por lo que el testigo sólo pudo ver que el adolescente entró y



salió de dicho lugar y que en un momento escupió al suelo, al parecer sangre, dándole el deponente su propia explicación a este fenómeno, que no es compartida en lo absoluto por el tribunal (un sangrado de nariz producto del estrés). En la misma dirección, es irrelevante desde el punto de vista penal que en las varias horas que duró la grabación, hayan concurrido al sector otros funcionarios de la misma unidad policial, pues el adolescente fue enfático en cuanto a que el único carabinero que los agredió fue el acusado Sebastián Quiroz González y no otra persona.

Finalmente, pero no menos importante, es que no se divisa ganancia secundaria alguna que podrían tener el ofendido y su madre para denunciar los hechos, pues una eventual acción civil contra el Estado es sólo la consecuencia natural de una agresión ilegítima cometida por agentes del Estado en contra de ciudadanos de la República, y en el ejercicio de sus funciones.

Por todas estas razones, se ha negado lugar a la petición de absolución del acusado planteada por la defensa, toda vez que las pruebas presentadas al juicio permitieron crear en el Tribunal la convicción necesaria para dar por acreditados los hechos y la responsabilidad del acusado en los mismos, constitutivos de al menos una transgresión en la esfera de la sexualidad que afectó a la víctima.

DÉCIMO QUINTO: *Audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal.* Que, llamados los intervinientes a debatir sobre antecedentes relevantes a considerar al momento de aplicar la pena, conforme lo dispuesto en el artículo 343 inciso cuarto del Código Procesal Penal, el Ministerio Público incorporó el extracto de filiación y antecedentes del acusado, el cual no registra anotaciones anteriores. El fiscal y la querellante reconocieron la atenuante prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, y con su mérito, además de la agravante especial del artículo 150 D, inciso 2°, del mismo código, ratificaron las pretensiones punitivas contenidas en sus respectivos libelos acusatorios.

La defensa solicitó el reconocimiento de la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, y pidió la imposición del mínimo de la pena asignada por la ley.

Se hizo presente que el acusado no registra abonos que considerar.

DÉCIMO SEXTO: *Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal.* Que en virtud de lo señalado en el fundamento que



antecede, favorece al acusado la atenuante de responsabilidad penal del artículo 11 N° 6 del Código Penal, teniendo en consideración que el acusado no registra condenas en su prontuario.

Asimismo, al ser la víctima menor de edad a la época de los hechos, perjudica al acusado la agravante especial establecida en el artículo 150 D, inciso 2° del Código Penal, por lo que la pena debe aumentarse en un grado.

Por último, se ha descartado la concurrencia de la agravante genérica del artículo 12 N° 6 del Código Penal invocada por el acusador particular, desde que la misma es inherente a la forma de comisión del delito de apremios ilegítimos, de manera que su doble consideración y punición infringiría el principio de *non bis in ídem* consagrado en el artículo 63 del Código Penal.

DÉCIMO SÉPTIMO: Determinación de la pena en concreto. Que, al momento de determinar la sanción a aplicar al acusado, debe tenerse presente lo siguiente:

a) La pena asignada al delito de apremios ilegítimo establecida en el artículo 150 D del Código Penal, es de presidio menor en su grado medio a máximo.

b) El acusado ha sido hallado responsable del delito de apremios ilegítimos, en grado de consumado, y en él le ha correspondido responsabilidad en calidad de autor.

c) Luego, al presentarse el acusado con una circunstancia atenuante de responsabilidad criminal y concurrir la agravante especial establecida en el inciso 2° del artículo 150 D del Código Penal, se impondrá la pena en el mínimo del tramo superior, esto es, 3 años y 1 día, atendido que se impondrá un intenso régimen sustitutivo de la pena privativa de libertad.

DÉCIMO OCTAVO: Libertad vigilada intensiva. Que, por reunir las exigencias de los artículos 1, 15, 17 y 17 ter de la Ley N° 18.216, se sustituirá la pena corporal impuesta al penado Sebastián Andrés Quiroz González por la de libertad vigilada intensiva, en la forma que se dirá en lo resolutivo.

DÉCIMO NOVENO: Costas. Que, atendido lo dispuesto en el artículo 47 del Código Procesal Penal, se condenará en costas al sentenciado por resultar completamente vencido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 11 N° 6, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 21, 24, 25, 26, 30, 50, 68, 69 y 150 D del Código



Penal; 1, 45, 47, 295, 296, 297, 306, 309, 323, 325, 326, 328, 333, 340, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal, se declara que:

I.- Se condena a SEBASTIÁN ANDRÉS QUIROZ GONZÁLEZ, cédula de identidad N° 16.615.718-8, ya individualizado, a sufrir la pena de **tres años y un día de presidio menor en su grado máximo**, por su responsabilidad como autor de un delito consumado de apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 150 D del Código Penal, ocurrido en Quilpué el 21 de mayo de 2018, en perjuicio de Patricio Antonio Alvarado Meza, con costas.

II.- Se le impone, asimismo, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

III.- Que se sustituye al sentenciado Quiroz González el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por la **LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA** por igual término que el de la pena privativa de libertad, debiendo presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile correspondiente a su domicilio y cumplir, además, durante el período de control con el plan de intervención individual que se apruebe en su momento, por el tribunal de ejecución competente, y con las condiciones legales del artículo 17 de la referida Ley.

Adicionalmente, se impone al sentenciado las condiciones de las letras b) y d) del artículo 17 ter de la Ley N° 18.216, esto es, la prohibición de acercarse a la víctima y a su familia; y la obligación de cumplir programas formativos en materia de prevención de delitos como el de autos.

El sentenciado deberá presentarse al Centro de Reinserción Social respectivo, dentro del plazo de cinco días contados desde que estuviere firme y ejecutoriada esta sentencia, bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra, conforme lo autoriza el artículo 24 de la Ley precitada.

Si la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada y el condenado deba ingresar a cumplirla en forma íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta, se deja constancia que no existen abonos que considerar.

Se previene que la magistrada Nash desestimó la adecuación de los hechos establecidos en el tipo penal objeto de la acusación, al



considerar que la conducta desplegada por el acusado no se encuadra en aquellas para la que fue concebida la ley que regula los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y tampoco en el delito común de apremio ilegítimo. Este supone que el funcionario compela a una persona a ejecutar algo que no quiere o no tiene por qué hacer, por la fuerza, como por ejemplo, cuando se golpea al detenido para que aporte alguna información, o se le obliga a hacer sentadillas desnudo. Justamente esto último dijo la madre de la víctima y él mismo, pero no se acreditó, y ni formó parte de los hechos de la acusación.

Tampoco formaron parte de los hechos de la acusación, las imputaciones que el menor hizo a otros carabineros, quienes lo habrían golpeado en conjunto. Y en tal sentido, no se entiende cómo delimita las lesiones que le ocasionaron aquellos golpes y los que son de cargo del acusado.

En efecto, en el relato de oídas que hizo en el juicio el psicólogo del Servicio Médico Legal Diego Arratia Yáñez, señaló que en la entrevista profesional que le hizo a Patricio Alvarado Meza, éste le relató que en la Comisaría de Quilpué los carabineros quisieron apropiarse de sus cosas, lo golpearon, lo insultaron, y fue forzado a desnudarse y a hacer sentadillas con los genitales expuestos. También le dijo que en el calabozo fue víctima de burlas y varios funcionarios lo golpearon (en plural). Agregó, que uno de los carabineros ellos lo llevó a un baño donde no había cámara, lo azotó contra la muralla, fracturándole el tabique nasal. A esta persona la identificó como el acusado. Luego, conforme a las probanzas del juicio, la víctima no se fracturó el tabique nasal, sino que tuvo contusiones, eritemas y sangramiento de nariz, todas las cuales médicamente se calificaron de leves.

Esta jueza concuerda con la mayoría, en lo relativo a que al ir al baño desde la celda en que se encontraba, el acusado golpeó de alguna manera al menor, y por eso salió por el pasillo tocándose la cara. Posteriormente se le constataron lesiones que describe el DAU en su rostro, las que fueron calificadas de leves, pero que jurídicamente se han



encuadrado en tipo penal del artículo 399 del Código Penal de lesiones menos graves, atendido el tiempo de sanación de las mismas según se acreditó.

Pero imputarle al acusado todas las lesiones leves que tuvo el ofendido, parece excesivo, cuando el mismo afectado dijo que otros policías también le pegaron. Además, hay que tener en cuenta que el menor contaba con lesiones –como las de las muñecas o contusiones en el muslo- que son propias de una detención no pacífica, como aconteció, y existe la posibilidad que él se haya ensuciado la polera con tierra cuando cayó en el suelo en la Plaza Vieja de Quilpué, en el mismo momento, ya que se golpeó con la bicicleta de un policía. Sin embargo, no hay acabado respaldo de estas últimas circunstancias fácticas, lo que no implica que haya que desplazarlas al actuar del acusado, ya que la responsabilidad es personal.

En síntesis, la conducta del acusado se adecua al delito de lesiones menos graves, afectándole la agravante del artículo 12 N° 8 del Código Penal, ya que el acusado se aprovechó de la posición en que se encontraba - a cargo de la custodia de un detenido –para hacer lo que hizo, prevaleciéndose del carácter público que tenía.

Ejecutoriado que sea el presente fallo, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, oficiándose a la Contraloría General de la República, al Servicio de Registro Civil e Identificación, al Centro de Cumplimiento Penitenciario que corresponda y al Registro Nacional de Conductores, conforme lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley de Tránsito, debiendo, además, adjuntarse copia de esta sentencia con el atestado de encontrarse ejecutoriada.

Devuélvase, en su oportunidad los elementos de prueba incorporados al juicio.

Regístrese y comuníquese al Juzgado de Quilpué para su cumplimiento, ejecutoriado que sea el presente fallo. Hecho, archívese.

Sentencia redactada por el Juez don **Fernán Rioseco Pinochet**, y de la prevención su autora.



RUC 1810036199-6

RIT 52-2023.-

SENTENCIA DICTADA POR UNA DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE VIÑA DEL MAR, PRESIDIDA POR LA MAGISTRADA CLAUDIA ORTIZ LEIVA, E INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS MARCELA NASH ÁLVAREZ Y FERNÁN RIOSECO PINOCHET.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKNDXFHXPBS